

CAPÍTULO 1

EXPLICANDO EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Es deber de la Comisión de la Verdad y Reconciliación «analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que desde la sociedad y las instituciones del Estado contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú»¹. Como producto de ese análisis, la CVR encuentra que la causa inmediata y decisiva para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú fue la libre decisión del PCP-SL de iniciar una denominada «guerra popular» contra el Estado, a contracorriente del sentir abrumadoramente mayoritario de millones de peruanos y peruanas que hacia fines de la década de 1970 canalizaban sus anhelos de transformación profunda de nuestra sociedad por otras vías, principalmente a través de la proliferación de organizaciones sociales de todo tipo (federaciones campesinas y sindicales, organizaciones barriales, de mujeres, de pequeños y medianos empresarios); de movilizaciones sociales fundamentalmente pacíficas; de la participación electoral que se mantuvo alta desde que se reinstauró la democracia en 1980. Para concretar sus planes el PCP-SL utilizó principalmente el espacio educativo, captando e ideologizando pequeños núcleos de jóvenes a través de los cuales buscó asentarse en los márgenes rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político. SL buscó explotar así antiguas fallas históricas, que atraviesan el Estado y la sociedad peruana; y aprovechó los graves errores cometidos al responder a su desafío por parte de los sucesivos gobiernos a partir de 1980 y de las FF.AA. y Policía Nacional.

Sin embargo, el PCP-SL resultó estratégicamente derrotado por la respuesta militar y policial, pero fundamentalmente porque nunca pudo ganar apoyo de sectores importantes de peruanos, menos aún de los más pobres y rurales, que terminaron enfrentándosele organizados como Comités de Autodefensa. Terminó, por tanto, como comenzó: aislado, condenado a ejercer cada vez más el terror y con su cúpula cayendo finalmente sin disparar un tiro.

¹ Decreto Supremo, artículo 2, inciso a.

1.1. LA DECISIÓN DEL PCP-SL DE INICIAR EL CONFLICTO

Según muestra la experiencia histórica, no hay violencia con propósitos políticos² sin una voluntad que la organice y la ponga en práctica. En el Perú, esa voluntad estuvo encarnada en el PC del P (SL), en cuya configuración confluyeron distintas tradiciones.

Por un lado, la tradición marxista-leninista, que otorga un privilegio ontológico al proletariado como clase portadora de una nueva sociedad más justa (el comunismo) y el papel central de la revolución a una vanguardia iluminada, organizada en un partido de cuadros, selectos y secretos, que desarrolla una «violencia revolucionaria» que ellos consideran no sólo legítima sino indispensable para tomar el poder y realizar los necesarios cambios estructurales. El PCP-SL se inspiró en la versión maoísta de esta tradición, la cual otorga al campesinado el papel de «fuerza principal» de una revolución que adoptaría la forma de «guerra popular prolongada» del campo a la ciudad, manteniendo el proletariado su papel fundamental de «clase dirigente». Como lo reconoce el propio Guzmán, el PCP-SL se inspiró directamente del momento más radical del maoísmo: la denominada Gran Revolución Cultural Proletaria (1966-76) y su reclamo de una «dictadura omnímoda sobre la burguesía»³, impuesta sin importar los costos en vidas humanas, pues su ética instrumental se centra en: «ver clases y no personas»⁴. De acuerdo a Guzmán, la Revolución Cultural es el hito mayor de la historia humana, porque descubrió «cómo cambiar las almas». De allí tomó también el culto a la personalidad, la idea de la «jefatura de la revolución» y la posibilidad que ésta disuelva «en situaciones extremas», el Comité Central del partido.

En el PCP-SL, el maoísmo se entrelazó con una tradición radical peruana, confrontacional / insurreccional, iluminada y por lo tanto sectaria⁵, que subestimaba la democracia representativa y la política como espacio de diálogo, negociación y búsqueda de acuerdos. A la democracia representativa le oponía la democracia directa (asambleas), en la perspectiva de una democracia real (igualdad económica).

En la construcción del proyecto senderista, esa tradición radical peruana estuvo siempre subordinada al maoísmo. Sin embargo, hubo un momento en el que cobró importancia, cuando en medio de las disputas dentro del PCP-Bandera Roja (maoísta), Sendero Luminoso levantó la figura

² Específicamente, la conquista del poder del Estado.

³ Título de un artículo de Zhang Chunqiao (Bandera Roja, n.4, 1975), dirigente del llamado Grupo de Shanghai o «Banda de los Cuatro», impulsor del viraje más ultraizquierdista de la Revolución Cultural. Zhang es citado por Guzmán en la denominada «Entrevista del siglo».

⁴ Durante la polémica chino-soviética, Mao Zedong restó en repetidas ocasiones importancia al peligro de una guerra atómica: «cuanto más temprano la desaten (los belicistas), más pronto serán barridos de la faz de la tierra...ese montoncillo de bombas atómicas que poseen los EEUU no es suficiente para acabar con los chinos. Aún en el caso de que los EEUU, contando con bombas atómicas de un poderío mucho mayor que el actual, las arrojaran sobre China hasta horadar el globo terrestre y volarlo, eso, aunque podría ser un acontecimiento de gran magnitud en el sistema solar, no significaría mucho para el universo en su conjunto.» (Mao Zedong, «La bomba atómica no intimida al pueblo chino», *Obras Escogidas*, Tomo V, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín 1977, pp.162-3.

⁵ En ese sectarismo se inscriben desde el lema de las primeras décadas apristas: «sólo el APRA salvará al Perú», hasta la tesis más recientes de la izquierda marxista sobre el proletariado como clase de vanguardia o el partido único como régimen político.

de José Carlos Mariátegui, principal representante socialista de la tradición radical peruana y proclamó: «Retomemos a Mariátegui y reconstituamos su partido»⁶. Sin embargo, una vez que las fronteras del PCP-SL dentro del universo de la izquierda maoísta estuvieron más o menos definidas, el partido se cohesionó cada vez más alrededor de la figura de su jefe, Abimael Guzmán. Así, mientras la imagen de Mariátegui palidecía hasta prácticamente desaparecer de los documentos senderistas, Guzmán se convertía en presidente Gonzalo, cuarta espada del marxismo, el más grande marxista-leninista-maoísta viviente, encarnación del desarrollo de 15 mil millones de años de materia en movimiento»⁷. Es innegable que alrededor de su propia figura Guzmán logró construir una férrea unidad partidaria, que se mantuvo incluso después de su captura, quebrándose sólo cuando el predicador de la violencia extrema decidió solicitar al gobierno un acuerdo de paz en 1993.

Vemos así que, mucho más que esa tradición radical, comprensible en el contexto de discriminación social, exclusión política y gobiernos dictatoriales de la mayor parte del S.XX, pesó otro aspecto de nuestra tradición autoritaria, más antiguo y más ampliamente compartido: el caudillismo. El debate marxista sobre el papel de la personalidad en la historia⁸, transformado por SL en debate sobre la jefatura en la revolución, fue aprovechado para llevar a extremos insospechados lo que en la tradición marxista se denomina «culto a la personalidad».

Muchos de los gestores de una voluntad política como esta provenían de **un eslabón social especialmente sensible**: un desgajamiento del estrato tradicional *misti*⁹ conformado por sectores minoritarios de intelectuales provincianos mestizos de ciudades medianas y pequeñas, con percepción de «incongruencia de status». «Notables» dentro de la sociedad tradicional, resultaban sin embargo «ninguneados» por las elites capitalinas y se veían al mismo tiempo rebasados por los estratos populares emergentes, que les perdían el «respeto» luego de pasar por la escuela, el sindicato, la ciudad y/o el mercado¹⁰. Es desde ese eslabón que surgen una personalidad como Guzmán y un proyecto autoritario como el del PCP-SL.

El abandono de la educación pública por parte del Estado permitió que el espacio educativo se convirtiera en lugar de **encuentro donde germinó esta propuesta**: universidades / institutos superiores / institutos pedagógicos. Núcleos *minoritarios* de intelectuales provincianos mestizos¹¹ se articularon allí con *sectores minoritarios* de esos jóvenes —hombres y mujeres— provincianos, mestizos, con educación superior al promedio, sensibles a propuestas de ruptura radical con el orden establecido. En algún momento hacia 1970, estos letrados descubren el potencial de algunos

⁶ Véase el documento del mismo nombre, fechado en 1975.

⁷ Véase capítulo sobre SL.

⁸ Véase, por ejemplo, las reflexiones de Plejanov.

⁹ *Misti* es el término quechua para designar a los mestizos —patrones o notables— que habitaban en los centros poblados y formaban parte de los poderes locales tradicionales.

¹⁰ Sobre los cambios en la relación entre *mistis* e indios hablan desde las novelas de Arguedas o el ensayo de Aníbal Quijano sobre el proceso de *cholificación*, pasando por infinidad de monografías antropológicas hasta ensayos producidos ya en la década de 1980 como *Desborde popular y crisis del Estado* (Matos Mar), *La otra modernidad* (Carlos Franco) e incluso *El otro sendero* (Hernando de Soto).

¹¹ Con algo, o mucho, de los «literati» de Weber.

centros de estudios superiores públicos como ámbito de reclutamiento primero, y luego como «correos de transmisión» entre el partido y el campesinado. Partían, por un lado, de la tradición leninista de partidos de vanguardia que se reproducen a través de «escuelas de cuadros». Pero el factor clave para entender el resultado final de este encuentro (es decir, al PCP-SL) es que en esos centros prevalecía una transmisión vertical de conocimientos donde el maestro sabe y el alumno aprende / obedece. Por eso el PCP-SL floreció entre los escombros de proyectos educativos renovadores colapsados, como fueron la Universidad de Huamanga o la Cantuta en la década de 1970¹², y fue al mismo tiempo causa activa de su colapso y de su regresión, encubierta como radicalización a través de lo que hemos denominado «revolución de los manuales»¹³. De esta forma, SL pudo desplegar su dimensión de **proyecto pedagógico** tradicional y autoritario.

¿Cómo estos pequeños núcleos lograron configurar esa voluntad tan fuerte a lo largo de la década de 1970? En primer lugar, es importante recordar que los partidos de cuadros altamente ideologizados de la tradición leninista suelen constituir voluntades muy poderosas. El propio Abimael Guzmán, para reforzar la idea de un partido de cuadros selectos en contraposición a uno «de masas», recordaba el caso de la URSS: «¿Cuántos bolcheviques había cuando triunfó la revolución de Octubre?: ¡Ochenta mil en un país de 150 millones de habitantes!»¹⁴. A partir de allí, SL avanza en su proyecto de construir una organización pequeña pero afiada, que ellos mismos definen como una «máquina de guerra».

El PCP Sendero Luminoso ofrece para ello, antes que nada, un discurso con pretensiones de ser absolutamente coherente. La «reconstitución» del PCP-SL es, en un principio, la articulación de un «gran relato» de pretensiones totalizadoras. Este, presentado como una **ideología científica**, «todopoderosa porque es verdadera»¹⁵, proporciona una comprensión simple y aparentemente coherente no sólo del país sino del universo todo; y un universo moral simple, en blanco y negro, que da sentido a las vidas de quienes lo comparten¹⁶.

La culminación del gran relato totalizador es **una utopía**, el comunismo: «La sociedad de la ‘gran armonía’: «la radical y definitiva nueva sociedad hacia la cual 15 mil millones de años de materia en movimiento, de esa parte que conocemos de la materia eterna, se enrumba necesaria e incontinentemente...Única e insustituible nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores, sin clases, sin Estado, sin partidos, sin democracia, sin armas, sin guerras».¹⁷

¹² Véase en el capítulo sobre Universidades y en las monografías sobre la UNSCH y La Cantuta, el auge pedagógico de dichas universidades en la década de 1960 y su posterior deterioro.

¹³ Sobre la «revolución de los manuales» y la expansión en las universidades públicas de un marxismo simplificado y dogmático, véase el capítulo sobre Universidades.

¹⁴ Abimael Guzmán. Entrevista del Siglo 1988.

¹⁵ PCP-SL 1988^a:II.

¹⁶ «Simple» significa aquí fácilmente transmisible en el ámbito educativo, y alude a la dimensión de «pedagogía autoritaria» de Sendero Luminoso.

¹⁷ PCP-SL 1986:20.

Para alcanzar esta sociedad sin movimiento, literalmente «el fin de la historia», se requiere sin embargo provocar una ruptura de ribetes apocalípticos. El inicio de la lucha armada (ILA) es el parteaguas que separa los tiempos viejos de los nuevos, es «sello y apertura». Como hemos visto en el capítulo sobre SL, cuando Guzmán decide lanzar a su partido a la «lucha armada», el tono de sus discursos cambia y el partido atraviesa un período de luchas internas entendido como purificación y renacimiento, personal y colectivo¹⁸. Ellos son la mano que escribe en la pared en medio del banquete; la guerra popular un prolongado Armagedón, del cual sólo los comunistas saldrían salvos.

El PCP-SL ofrece **una propuesta organizativa**: el partido comunista, que se militariza porque SL produce, además y sobre todo una propuesta militar: la estrategia de «guerra popular prolongada». Iniciarla con lo que el mismo Guzmán reconoce era sólo «un puñado de comunistas», requiere que el partido sea una institución total, que organiza y controla todos los aspectos de la vida cotidiana y florece sobre todo en espacios cerrados: las células partidarias, los comedores y viviendas universitarias, las cárceles, algunas comunidades que SL logra ganar temporalmente, o aislar y convertir en base de apoyo. En todos ellos, los militantes construyen **una identidad total**.

Si bien es necesario recalcar estos aspectos para entender la condensación de voluntad política que significó SL, es importante rescatar también los lados más prosaicos del proyecto. La otra cara del caudillismo es el clientelismo, que SL practicó con profusión en las universidades donde apuntó a copar las direcciones de bienestar, que manejan comedores y viviendas universitarias¹⁹. Los militantes, especialmente los jóvenes, encontraban en SL no sólo orden sino organización de su tiempo libre, espacio para la aventura y posibilidades de ascenso social «por la vía del partido», en un contexto en el cual les era difícil lograrlo «por la vía del mercado»²⁰.

Hasta aquí, podríamos decir que el PCP-SL resulta una versión exacerbada de otros grupos vanguardistas de izquierda, con una identidad muy fuerte, que creían aquí y en otras partes del mundo en la guerra popular como modo de conquistar el socialismo y el comunismo. Sin embargo, otros dos rasgos que se perfilan hacia fines de la década de 1970, vuelven al PCP-SL un fenómeno muy especial: **los extremos a los que lleva el caudillismo y el fanatismo**. Ya hablamos del primero. Baste añadir que, a diferencia de otros líderes comunistas, en los que el culto a la personalidad se desarrolla por iniciativa de alguno(s) de sus seguidores —Stalin en el caso de Lenin, Lin Biao en el caso de Mao²¹— en el PCP-SL es el propio Guzmán el que lo promueve e impone en dura lucha contra los dirigentes nacionales de su partido²². Esta construcción del partido alrededor de una figura endiosada fue un punto muy importante para lograr la cohesión interna

¹⁸ La simbología de purificación, renacimiento y salvación es profusa en los discursos previos al inicio de la lucha armada. Véase: La nueva bandera, Sobre tres capítulos de nuestra historia, Somos los iniciadores.

¹⁹ Véase: capítulo sobre Universidades.

²⁰ Como en un juego de espejos, serían «el otro sendero» del «Otro Sendero» analizado por de Soto.

²¹ Seguramente con la anuencia o complicidad de los implicados.

²² Véase: actas del I Congreso, en el capítulo sobre SL.

necesaria para lanzar su «guerra popular», pero se convirtió también en su talón de Aquiles cuando «la jefatura» cayó presa en 1992.

El fanatismo, que adquiere ribetes de culto a la muerte se va convirtiendo en uno de los aspectos medulares de la identidad senderista y tiene que ver con la transformación de la violencia en un fin en sí misma y ya ni siquiera un medio; y comienza con la exacerbación de la violencia del discurso senderista **antes** del inicio de su lucha armada. La ferocidad del discurso de Abimael Guzmán en el período de preparación para la «guerra popular» anuncia el tipo de violencia que golpeará al país a partir de 1980 y el tipo de militantes que conforman el PCP-SL: dispuestos a «llevar la vida en la punta de los dedos» y a «cruzar el río de sangre» necesario para el triunfo de la revolución. Esta disposición a la muerte se acrecienta con las cartas de sujeción al presidente Gonzalo, que los militantes firman al ingresar a SL. La exaltación del papel del caudillo, no sólo de sus ideas sino de su persona pues él **encarna** el pensamiento más elevado en la historia de la humanidad, contrasta con la práctica desaparición de la individualidad de los militantes. Luego vendrían «la cuota» y la estrategia de «inducir genocidio», donde los militantes probaron su disposición a morir, como en las cárceles, por ejemplo.

Al analizar la configuración de la voluntad política del PCP-SL, hemos trazado también la genealogía de la concepción de poder senderista, que se remonta a la vieja dicotomía misti / indio imperante en el orden gamonal, donde el dominio se basaba en el monopolio del poder económico y político, y en un discurso racista que «naturalizaba» la inferioridad del indio. En este caso, la justificación de la superioridad partidaria se basó en un tipo de saber excluyente, el saber «científico» que era supuestamente privilegio del proletariado. A través de una sustitución total, SL se autodenominó representante exclusivo de ese proletariado, pero lo importante para nuestro argumento es cómo la vieja dicotomía se reprodujo dentro del propio partido entre jefatura y militantes. En este caso, el fundamento de la dominación / subordinación está en el monopolio de la comprensión de las leyes de la historia por parte de la jefatura.

Lo que se mantiene constante a lo largo de toda esta historia es una relación vertical, autoritaria, en la cual el poder se negocia a través del uso de la violencia física y queda inscrito en los cuerpos. El PCP-SL se inscribe entonces en una antigua tradición que va desde el recurso al castigo físico tanto en haciendas y puestos (o incursiones) policiales como en comunidades, hasta el premonitorio proverbio «la letra con sangre entra» de la escuela tradicional²³. El partido traslada esa violencia a su propio seno a través de los «acuchillamientos», esa forma de violencia simbólica que ejercen los propios militantes para redoblar su sujeción al presidente Gonzalo²⁴.

La voluntad política es decisiva para explicar el inicio de cualquier subversión armada, pero no basta para explicar su duración, en nuestro caso, para explicar cómo ese «puñado de

²³ Es importante contrastar entonces la concepción de orden de las escuelas tradicionales con la de los sindicatos. Allí está una de las claves para explicar el tránsito de militantes leninistas subordinados al «centralismo democrático» de un comité central, a sujetos que firman cartas de sujeción a una persona, el llamado presidente Gonzalo.

²⁴ Véase capítulo sobre SL.

comunistas» avanzó hasta dar la sensación de que ponía en jaque al Estado y al país entero. Para comprender esa «década de la violencia» es necesario advertir cómo esa voluntad política aprovechó determinadas coyunturas, se alimentó de antiguas debilidades institucionales, aprovechó determinadas fallas estructurales, recogió ciertas reivindicaciones y graves frustraciones, expresó cierto imaginario y logró enraizarse en distintos sectores sociales y escenarios geográficos. Es necesario preguntarnos, entonces, por las causas históricas que le permitieron encontrar espacio a la explosión senderista.

1.2. EL CONTEXTO HISTÓRICO

«Tierra o muerte» fue el lema que entre 1958 y 1964 identificó al movimiento campesino más importante por esos años en América del Sur. Cientos de miles de campesinos y trabajadores agrícolas se organizaron y movilizaron a lo largo del país, ocuparon cientos de miles de hectáreas en manos de grandes propietarios. Sin embargo, en todos esos años murieron sólo 166 personas²⁵, menos que en los primeros diez días de agosto de 1991.

En la década de 1970, una segunda oleada de ocupaciones de tierras conmovió al país en plena aplicación de la reforma agraria más radical de América del Sur. La movilización no fue tan amplia como en la década previa, pero la organización campesina alcanzó su pico más alto luego de la reorganización de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la creación de la Confederación Nacional Agraria (CNA) en 1974. Sin embargo, otra vez, el costo en vidas humanas fue bajísimo en comparación a las muertes de la década siguiente²⁶.

Mientras tanto, las ciudades del país vivían desde 1976 una efervescencia social sin precedentes, que se traducía en movilizaciones y paros obreros, magisteriales, regionales, que desembocaron en los paros nacionales de julio de 1977 y mayo de 1978. El primero de ellos tuvo incidencia directa en la apertura democrática que se inició pocos días después, cuando el régimen militar convocó a una Asamblea Constituyente para el año 1978. Pero también aquí, nuevamente, en los paros nacionales, regionales y sectoriales de la segunda mitad de la década de 1970, el número de víctimas fatales fue mínimo.

Una objeción al argumento desarrollado en las líneas anteriores es que tiene como eje a movimientos sociales, mientras que los proyectos del PCP-SL y del MRTA tenían objetivos

²⁵ Véase: Guzmán y Vargas 1981. Destacan por su importancia las tomas de tierras en Cerro de Pasco y el movimiento de La Convención (Cusco). En las primeras, entre diciembre de 1959 y julio de 1962 perdieron la vida 25 campesinos. En La Convención, durante el pico más alto de movilización encabezada por Hugo Blanco, entre el 20 de octubre de 1962 y el 2 de enero de 1963 fallecieron 15 personas: 7 campesinos, uno de ellos mientras participaba en un mitin en la ciudad de Cusco; 5 que aparecen como guerrilleros y 3 policías.

²⁶ Moisés Arce Llacta y Humberto Vargas fueron los dos únicos campesinos muertos en el movimiento de Andahuaylas, el más importante de la década Véase: García Sayán 1982:83; Quintanilla 1981:88-89), Sánchez 1981:197, 207. Otros cuatro murieron en Huacataz, Cajamarca, el 28 de diciembre de 1977 (Véase: García Sayán 1982:83). Un cooperativista resultó accidentalmente muerto en Lucrepata, Cusco el 21 de noviembre de 1978 (*Op.cit.*:154). El 6 de febrero de 1979 murió Elmer Jara en Talandracas, Piura (*Ibid.*:48).

políticos. Sin embargo, también en ese plano un recorrido por las décadas previas encuentra poca violencia. Los años 1955-56 marcaron un punto de viraje. En 1955, masivas movilizaciones políticas en Arequipa provocaron la renuncia del temido Ministro de Gobierno y Policía, Esparza Zañartu, lo que marcó el inicio del fin de la dictadura de Manuel A. Odría. Esas movilizaciones produjeron dos muertos. Desde entonces, el país no volvió a sufrir situaciones de persecución política masiva²⁷. En 1956, después de más de dos décadas de «catacumbas», el APRA se incorporó definitivamente a la legalidad, al tiempo que se consolidaban nuevos partidos: Acción Popular, Democracia Cristiana, Partido Social Progresista. Incluso los golpes militares de 1962, 1968 y 1975 fueron incruentos. En comparación con otros países de América Latina, la oleada guerrillera inspirada en la revolución cubana, fue menor. Las guerrillas del MIR y del ELN en 1965 provocaron algunas decenas de muertos. Los pleitos entre el APRA y la izquierda en sindicatos y universidades, y entre distintas facciones de izquierda en esos mismos ámbitos dejaban por lo general sólo un saldo de contusos.

A pesar de su naturaleza autoritaria y de lo radical y controvertido de sus reformas, tampoco el régimen militar (1968-1980) fue especialmente represivo en comparación con sus coetáneos del Cono Sur. Durante la primera fase, encabezada por el Grl. Velasco (1968-75), algunos líderes opositores fueron enviados al exilio; 18 personas murieron en los movimientos por la gratuidad de la enseñanza en Ayacucho y Huanta en junio de 1969; asimismo, cinco trabajadores en la mina Cobriza (Huancavelica) en 1971. El episodio más sangriento del gobierno Velasco fue la huelga policial el 5 de febrero de 1975 y los desórdenes que le siguieron, en los que murieron alrededor de 100 personas. Ya durante el gobierno de Morales Bermúdez (1975-80), en los paros nacionales de 1977 y 1978 hubo muy pocas víctimas.

De esta forma, la Constitución aprobada el 12 de julio de 1979 por la Asamblea Constituyente elegida el año anterior, parecía poner simbólica y legalmente fin a las grandes exclusiones políticas que habían obstaculizado nuestra construcción como estado nacional moderno. En efecto, la Constitución no excluía a ningún partido político y consagraba por fin la vigencia plena del sufragio universal, pues otorgaba derecho a voto a varones y mujeres mayores de 18 años y a los analfabetos. Para ese entonces, esta última categoría se superponía en lo fundamental con la de peruanos y peruanas monolingües quechuas, aymaras y de lenguas amazónicas.

Luego de las profundas transformaciones demográficas, económicas y socioculturales de las décadas previas, y del sismo político que significó el reformismo militar del Grl. Velasco (1968-75), el país parecía encaminado por fin a consolidar un Estado nacional, moderno y democrático, de manera fundamentalmente pacífica.

²⁷ La excepción fue el encarcelamiento de dirigentes izquierdistas en la colonia penal del Sepa, en la selva central, en 1962.

No es de extrañar, entonces, que el inicio del conflicto armado interno tomara por sorpresa al conjunto del país. No es de extrañar tampoco que su extensión y brutalidad nos sigan sorprendiendo. Resulta por tanto indispensable preguntarse por las causas del conflicto. No sólo por qué sucedió, sino: ¿por qué duró tanto?, ¿por qué fue tan cruel?. Pero también: ¿por qué no duró más? Responder a estas preguntas contribuirá a evitar que otro espasmo de violencia semejante pueda volver a ocurrir.

1.3. FACTORES HISTÓRICOS O DE LARGO PLAZO

El conflicto armado se inició en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del país, y fue allí donde produjo el mayor número de víctimas. De acuerdo a los testimonios recogidos por la CVR, la violencia golpeó principalmente a los habitantes más pobres en las áreas más pobres del país. Sin embargo, como esos mismos testimonios indican, la pobreza no explica por sí sola el estallido de violencia sin precedentes que vivió el país. Es más preciso verla como uno de los vectores importantes que contribuyó a encender el conflicto y como el telón de fondo sobre el cual se desarrolló este drama²⁸.

Contra ese telón de fondo, adquieren un papel muy importante en la explicación del conflicto las múltiples brechas que atraviesan el país. La más visible y dramática es la que separa a ricos y pobres. Tanto o más que la pobreza misma, importa la inequidad, las abismales diferencias entre los que más tienen y los que sobreviven. Recordemos que el Perú tiene una de las peores distribuciones del ingreso en América Latina y en el mundo.

Pero no se trata sólo de una distribución desigual de la riqueza sino también del poder político y simbólico, incluyendo aquí el uso de la palabra: quién «tiene derecho a hablar», quién es escuchado y a quién se le prestan oídos sordos. Esto es importante de destacar pues SL ofreció a sus seguidores *un discurso* que producía la ilusión de abarcar toda la realidad, así como la posibilidad de hacerse escuchar²⁹ y de silenciar. Riqueza y poder se distribuyen desigualmente a lo largo de nuestro territorio, produciendo otras brechas:

A. Entre Lima y provincias. A la desigual distribución del ingreso se suma el centralismo, que creció en las décadas previas al conflicto, ahondando paradójicamente la distancia entre la capital y el resto del país, precisamente cuando éste parecía más interconectado. A causa del centralismo, la cobertura territorial del Estado resultaba insuficiente. Hasta la década de 1970, en partes significativas del Perú rural la presencia del Estado era casi inexistente, o su autoridad estaba

²⁸ Comenzamos por este deslinde por cuanto en la década de 1980 se sobrevaloró el peso de la pobreza como factor explicativo de una violencia estructural generadora de violencia política. Uno de sus principales teóricos fue el profesor Johan Galtung. Este argumento condujo a que se piense la emergencia de grupos armados como un «comportamiento-respuesta a determinadas insuficiencias estructurales». En algunos casos, el argumento se usó incluso para justificar en distintos grados las acciones de SL y el MRTA.

²⁹ Desde las llamadas escuelas populares hasta los coches-bombas.

delegada en poderes locales, que no eran responsables ante la población. Recuérdese que recién en 1963 se realizaron las primeras elecciones municipales de nuestra historia contemporánea, las cuales fueron interrumpidas por el golpe militar de 1968.

B. Entre costa, sierra y selva. La gravitación económica, demográfica y simbólica de Lima y la costa en desmedro de los Andes, se fue acentuando conforme avanzaba el S.XX, hasta desembocar en la crisis de la sociedad andina tradicional. Paralelamente, la amazonía fue convirtiéndose en una zona de frontera donde los proyectos modernizadores del Estado naufragaron casi apenas formulados³⁰.

C. A lo largo del S.XX, también las viejas divisiones estamentales se fueron resquebrajando, volviéndose sus fronteras más porosas y borrosas. Sin embargo, las asimetrías entre criollos, mestizos, cholos e indios no desaparecieron. Estas, más bien, se reformularon, y siguieron pesando en el país las discriminaciones étnico-culturales y raciales.

El entrelazamiento de estas inequidades y discriminaciones produjo una creciente percepción de agravio y desconfianza, precisamente en el polo pobres-provincianos-serranos-rurales-cholos / indios, donde la CVR ha constatado el mayor número de víctimas. Esta percepción se volvió más dolorosa desde mediados del siglo pasado, conforme se aceleraron —muchas veces para quedar luego trancos— los procesos de modernización en el país. De ellos, los más significativos para responder nuestra pregunta fueron:

- i. las grandes migraciones,
- ii. la masificación del proceso de escolarización,
- iii. la expansión de los medios de comunicación,
- iv. la expansión del mercado,
- v. los procesos de organización, y la densificación y expansión de las redes sociales en el campo y la ciudad.

Aún cuando fragmentados y discontinuos, estos procesos de modernización fueron carcomiendo las bases estructurales y discursivas de la dominación tradicional, que «normalizaban» las discriminaciones clasistas, regionales, étnico-culturales, raciales.

Los fundamentos estructurales se resquebrajaron a partir de:

³⁰ Véase el capítulo: Escenarios regionales de la violencia.

- i. cambios demográficos tales como: mayor esperanza de vida, creciente urbanización;
- ii. cambios económicos: especialmente la expansión del mercado y la crisis de la agricultura y de la sociedad andina tradicional, en otras palabras, la crisis terminal del sistema de haciendas que, especialmente en las zonas más pobres de los Andes, producía una sociedad de señores y siervos, obstaculizando el surgimiento de ciudadanos.

Los fundamentos discursivos, que hacían que pareciera normal y soportable una sociedad con escasa movilidad social y con un orden jerárquico bastante rígido, se resquebrajaron a través de los procesos de migración a las ciudades, la escolarización masiva y la expansión de los medios de comunicación, especialmente las carreteras y la radio.

El resquebrajamiento del orden tradicional y el aceleramiento de los procesos de modernización ahondaron ciertas brechas y volvieron visibles otras. Entre las primeras, la más explosiva era la brecha entre Lima y el resto del país: la acentuación del centralismo, que provocó el surgimiento de importantes movimientos regionales a partir de la década de 1960. Entre aquellas que comenzaron a hacerse visibles en las décadas previas al conflicto armado interno, destacan:

La brecha generacional. La mejora en la salud pública y el inicio de la explosión demográfica hizo de por sí más visibles a los jóvenes. La masificación sucesiva del acceso a la escuela, al colegio y a la universidad, ahondaron las diferencias generacionales, especialmente en las zonas rurales. Nótese que, precisamente en Ayacucho, los principales movimientos sociales en las décadas previas al estallido del conflicto armado interno no fueron conflictos por tierras, como en otras regiones predominantemente agrarias del país, sino vinculados a demandas educativas. El primer Frente de Defensa del Pueblo, forma de organización que se reprodujo en la década de 1970 en diferentes partes del país, surgió en Ayacucho *alrededor de la defensa de las rentas de la Universidad de Huamanga* y durante sus primeros años tuvo una fuerte influencia de quienes después conformarían el PCP-SL. Luego en 1969, cuando la gratuidad de la enseñanza secundaria se vio amenazada por un Decreto Supremo del gobierno militar, se produjeron masivas movilizaciones en Huamanga y en Huanta.³¹

Téngase en cuenta, además, que fueron los jóvenes los protagonistas de las grandes migraciones y en proporción importante fueron también impulsores y líderes de múltiples procesos de organización social en el campo y la ciudad. Fueron ellos los protagonistas del denominado proceso de «cholicación» que marcó el país en esas décadas³².

³¹ Véase capítulos: Historia Regional Surcentral; Escenarios de la Violencia; casos de Universidades; UNSCH, SL.

³² Véase al respecto los ensayos de Quijano sobre la cholicación, escritos en la década de 1960. Posteriormente, en la década de 1980, los ensayos de Matos Mar sobre el «desborde popular y la crisis del Estado» o los de Carlos Franco sobre «La otra modernidad». También, muy importante no sólo por sus ideas sino por el alcance de su difusión, el ensayo de Hernando de Soto sobre «El otro sendero».

La brecha de género. Aunque algo más tarde, las mujeres comenzaron a acceder también a la escolarización, participaron y se volvieron también protagonistas en nuevas organizaciones sociales, irrumpiendo en espacios públicos en general³³.

Recuérdese que en nuestro país las jerarquías etarias y de género hacían y hacen sentir su peso no sólo en la sociedad nacional, sino todavía más en las sociedades regionales andinas y asimismo, al margen de especificidades culturales, en las comunidades campesinas y nativas.

Todo lo anterior alude a un proceso de modernización desigual, hecho de intentos desperdigados, intermitentes y muchas veces trancos, sea por la ausencia de una visión de conjunto y de largo plazo entre las elites políticas, empresariales e intelectuales que condujeron el país; sea por el entrampe político y/o las insuficiencias de proyectos nacionales que, de haber sido exitosos³⁴, hubieran logrado al menos un desarrollo económico sostenido que ampliara significativamente el mercado interno y propiciara una mayor integración del país en sus diferentes planos: económico, social, simbólico. Ese proceso produjo:

Capas sociales sensibles a propuestas de ruptura radical con el orden establecido. En especial, pero no únicamente: jóvenes –hombres y mujeres- provincianos, mestizos / cholos, con educación superior al promedio. Algunos sectores minoritarios de estas capas, desperdigadas por todo el país, se sentían en una tierra de nadie ubicada entre dos mundos: el tradicional andino de sus padres, que al menos parcialmente ya no compartían; y el urbano-criollo, que los rechazaba por provincianos, mestizos, «motosos». Entre ellas hubo **una minoría de personas** que se sintieron atraídas por un proyecto que les ofrecía una identidad muy fuerte a partir de una «visión del mundo» asequible por su simplicidad. Por su coherencia absoluta, esa visión del mundo los libraba de un presente que les ofrecía muy pocas satisfacciones y demasiadas incertidumbres.

Amplias áreas geográficas donde podían emprender su tarea: especialmente aquellas ubicadas en una suerte de limbo entre la modernidad instalada más que nada en el discurso político y en las expectativas; y el atraso y la pobreza descontextualizados del orden tradicional dentro del cual habían sido soportables y habituales por largo tiempo. Estas fueron las áreas del país más duramente golpeadas por el conflicto armado interno: amplias zonas andinas (desde la sierra de Piura y el sur de Cajamarca hasta el norte de Puno); la selva central y el valle del Huallaga; los conos de Lima.³⁵

1.4. LOS FACTORES INSTITUCIONALES

³³ Las mujeres adquieren derecho a voto desde 1956 y los jóvenes mayores de 18 años, como dijimos, a partir de 1979.

³⁴ Cada uno a su manera, nos referimos a proyectos como el liberal de Pedro Beltrán, el reformista de Acción Popular, la Democracia Cristiana y el partido Socialprogresista, y el reformista autoritario del Grl. Velasco, expresado en el Plan Inca.

³⁵ La costa, más integrada al mercado, y la selva baja poco poblada (Loreto, Madre de Dios), fueron las regiones menos golpeadas por la violencia. Véase: Escenarios Regionales de la Violencia.

A esta sociedad le correspondió un Estado poco legitimado. Hasta la década de 1970, la ley, el orden jurídico y el Estado republicano mismo eran cuestionados desde el paradigma revolucionario, que consideraba a la democracia representativa una «forma» vacía de contenido y subestimaba derechos y libertades individuales considerados burgueses. A la democracia formal se le oponía la democracia real, que sólo podía alcanzarse dentro de un Estado democrático popular o socialista, construido a través de una revolución que, para la mayoría de partidos de izquierda de la época, sólo podía triunfar por la vía violenta.

La vigencia del Estado de Derecho era también cuestionada por una larga tradición de *pronunciamientos* militares. En las cinco décadas previas al estallido del conflicto armado interno, el país tuvo sólo 14 años de gobiernos democráticos. Esa fragilidad expresaba modos conservadores de pensar y de hacer política, que consideraban natural un orden vertical y/o excluyente, impuesto cuando era necesario recurriendo a la violencia: modos conservadores desinteresados en la ampliación de la ciudadanía, que fue impulsada más bien desde la sociedad por movimientos de democratización social y política a lo largo del S.XX.

La ausencia desde la década de 1920 de partidos conservadores y liberales con propuestas nacionales, y leales al sistema democrático, favoreció esta endeblez ciudadana y, como contraparte, propició el papel activo de los militares en la vida política y reforzó su condición de institución «tutelar». La clase política había fluctuado mayoritariamente entre una suerte de desprecio aristocrático a los militares y el «tocar las puertas de los cuarteles» cuando necesitaban quién les saque las castañas del fuego. Así, a partir de la década de 1930, se suceden gobiernos militares autoritarios. En esos años, las nuevas organizaciones sociales y las representaciones políticas que se fueron gestando en torno a sus reivindicaciones, enfrentaron graves disyuntivas: buscar su inclusión silenciosa en el Estado para expandirlo lentamente desde dentro; confrontarlo masivamente y forzar su ruptura, que fue la alternativa encarnada por el APRA hasta mediados del S.XX; o emprender la lucha armada en nombre de la revolución social. Estos no fueron sólo dilemas de elites políticas sino de sectores y elites sociales emergentes.

La Guerra Fría redobló este cuestionamiento. La lucha entre las superpotencias agudizó los conflictos en toda América Latina, reubicando las viejas tradiciones militaristas del continente en un nuevo contexto y enmarcándolas dentro de una nueva doctrina de seguridad nacional, impulsada enérgicamente por los EE.UU en la región. En la estela de la revolución cubana (1959), una oleada de movimientos subversivos armados sacudió América Latina. La respuesta fueron golpes militares y dictaduras represivas. En el medio quedaron legítimas aspiraciones de transformación y democratización. En algún momento durante la década de 1970, en toda América Latina sólo Costa Rica, Venezuela y Colombia tenían gobiernos que cumplían con mínimos estándares democráticos. En nombre de los valores «occidentales y cristianos», los regímenes dictatoriales del Cono Sur –

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay- actuaban concertadamente para reprimir y eliminar violentamente a sus opositores³⁶, alentando de este modo las respuestas violentistas en la región.

A la modernidad trabada correspondió, como hemos dicho, un embrionario desarrollo de la ciudadanía. En el Perú y en América Latina, la conciencia de tener y ejercer derechos se desarrolló de manera desigual, abarcando tendencialmente primero los derechos sociales y más tardíamente los civiles y políticos³⁷. El sufragio universal sólo se instauró con la Constitución de 1979. En realidad, sólo se celebraron elecciones municipales en 1963 y 1966, convocadas por el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Su continuación, interrumpida por el golpe de 1968, hubiera permitido la ampliación del ejercicio ciudadano, el traspase de responsabilidades y recursos y una mayor presencia del Estado en el plano local. Fue por esta falta de ejercicio ciudadano democrático, que en ciertas zonas del país la instauración vertical de un «nuevo poder» senderista impuesto desde arriba y que construía sujetos (e incluso siervos) en vez de ciudadanos, no apareció como algo insoportable. Más aún si ese «nuevo poder» imponía en un primer momento un cierto orden y ejercía a su manera «justicia».

Pues si el desarrollo ciudadano era débil, la tradición de administración de justicia imparcial y universal era casi inexistente. Menos aún una justicia eficaz y cercana a la población. Tanto en las Audiencias Públicas como en los testimonios recogidos por la CVR, son innumerables las historias a manera de vía crucis en las que los protagonistas viajan desde lugares rurales apartados hasta la capital departamental y nacional en busca de una justicia que les da las espaldas. Peor aún, con frecuencia, cuando actuaba, la justicia tendía a ser parcializada y sus agentes abusivos. En ese contexto, cabe resaltar, por contraste, el papel de los jueces de paz, muchas veces con alta legitimidad, y que se convirtieron también con frecuencia en blanco del PCP-SL.

Así, los grandes cambios estructurales que transformaron el país fueron seguidos a duras penas por un proceso intermitente de modernización, democratización y reforma del Estado que, precisamente en las dos décadas previas al estallido del conflicto armado interno, desembocó en dos fracasos: a) el de la vía liberal democrática, iniciada desde 1956³⁸ y desarrollada con más nitidez durante el primer gobierno del Arq. Fernando Belaúnde (1963-68); y b) el de la vía del reformismo militar autoritario, durante el gobierno del Grl. Juan Velasco (1968-75).

1.5. LOS FACTORES COYUNTURALES

El estallido del conflicto armado interno encontró entonces a un Estado desbordado pues la «transición democrática» abarcaba campos más allá de aquellos relacionados directamente con el cambio de régimen político. Destacan como flancos débiles en esa coyuntura:

³⁶ Nos referimos al denominado Plan Cóndor.

³⁷ Véase Sinesio López, *Ciudadanos reales e imaginarios*.

³⁸ El gobierno de José Luis Bustamante (1945-48) puede considerarse el precursor de esta vía en el Perú contemporáneo. El alejamiento del APRA de su concepción «nacional-popular» inicial, permitió un intento más sostenido durante el gobierno de Manuel Prado (1956-1962), nuevamente interrumpido por el breve interregno militar (1962-63).

A. Hacia 1973, el Perú cerraba un ciclo de crecimiento económico de larga duración que se había prolongado por más de dos décadas. Dos años más tarde, en 1975, el primer «paquetazo» económico remeció al país. Nótese que el inicio de la crisis coincidió con la masificación de la educación secundaria y superior, así como el inicio de la expansión de Institutos Superiores y Academias Pre-Universitarias. Así, para 1980, el tamaño del aparato estatal (burocracia, empresas públicas, porcentaje del PBI estatal) había crecido y sin embargo el Estado como institución tenía más dificultades para cumplir sus obligaciones básicas con sus ciudadanos.

B. Vacíos relativos de poder en amplias zonas rurales, sobre todo andinas. Como parte del fracaso del proceso de Reforma Agraria, el gobierno del general Morales Bermúdez procedió a la desactivación del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), el aparato estatal que de alguna forma había cubierto el vacío dejado por los poderes locales tradicionales. Conforme el estado se replegaba del campo, las empresas asociativas —SAIS, CAPs— creadas por una Reforma Agraria colectivista, que revirtió la tendencia a la parcelación de la gran propiedad y el avance de la economía campesina y la mediana propiedad, quedaron como desperdigados islotes desmoralizados (con frecuencia debilitados desde dentro por administraciones incapaces o corruptas) y acosados desde dentro o desde los márgenes por quienes deberían haber sido sus beneficiarios.

A partir de 1977, el inicio de los operativos Verde Mar, impulsados por los EE.UU., crisparon la situación también en zonas importantes de la ceja de selva y empujaron a la ilegalidad a sectores amplios de colonos, llegados allí en las décadas previas a raíz de la apertura de la carretera Marginal y la promesa de apoyo del Estado. Estos comenzaron a dedicarse crecientemente al cultivo de coca por ausencia de alternativas económicas.

C. Entumecimiento de los partidos políticos, fuera de forma por la suspensión de elecciones nacionales y municipales, con varios de sus principales líderes exilados, desprestigiados por la propaganda oficial sobre las tesis del «no-partido» y la «democracia social de participación plena» enarboladas por el gobierno de las Fuerzas Armadas en contraposición a la democracia representativa.

Al referirnos a los partidos políticos, es de resaltar la ausencia de organizaciones partidarias o su repliegue de amplias zonas rurales. Esa ausencia hizo que las representaciones surgidas de las elecciones en la década de 1980 fueran tenues y resultaran crecientemente centradas alrededor de personas (candidatos nacionales o regionales) más que de organizaciones y propuestas. Este fenómeno fue favorecido por el voto preferencial. Cuando hablamos de repliegue aludimos sobre todo a los partidos de izquierda, pues durante la década de 1970 muchos de ellos habían establecido lazos y colaborado en la construcción de gremios campesinos.

Por otro lado, la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente luego del paro nacional de julio de 1977 fue un giro en parte inesperado del gobierno de Morales Bermúdez. Como dijimos, la tendencia principal en la época eran los gobiernos dictatoriales y, en efecto, incluso mientras avanzaba la transición, se barajaba intermitentemente la posibilidad de una «tercera fase» militar, más dura y represiva. Sin embargo, alentado posiblemente por el gobierno norteamericano de James Carter (1976-80), el proceso siguió adelante y Perú fue con Ecuador, los países que inauguraron esa oleada de transiciones democráticas en América Latina. Pero la ubicación de los partidos políticos en el carril de la transición significó una carrera contra el tiempo, en medio de grandes turbulencias sociales³⁹.

A pesar de todas las dificultades mencionadas, se eligió sin embargo una Asamblea Constituyente en 1978 y se elaboró la Constitución de 1979, que fue políticamente incluyente y democratizadora: incorporó a la legalidad a partidos de izquierda marxista y otorgó sufragio universal a mayores de 18 y a analfabetos. La responsabilidad principal de su redacción estuvo en manos del APRA y el Partido Popular Cristiano. Así, en mayo de 1980 el país concurrió después de 17 años a las urnas para elegir un gobierno civil.

Esta es una de las razones por las cuales, a partir de su caracterización del país como semifeudal, del régimen militar como fascista y de la transición como la «tercera reestructuración del Estado burocrático-terrateniente», para el PCP-SL era muy importante iniciar su lucha armada **antes** de las elecciones y de la instauración del nuevo régimen, para deslegitimarlo y negar las transformaciones de las cuales éste era expresión.

1.6. POR QUÉ EL CONFLICTO DURÓ TANTO

El PCP-SL resultó un enemigo inesperado. Tanto el gobierno de Morales Bermúdez como el flamante segundo gobierno de Fernando Belaunde, podían haber esperado, en todo caso, algún alzamiento armado semejante a los que por entonces tenían lugar en América Central o el Cono Sur, variantes de la guerrilla clásica latinoamericana. En otras palabras, podían esperar algo semejante al MRTA, mas no a Sendero Luminoso.

Los mencionados gobiernos y las FF.AA. desconfiaban de líderes izquierdistas como Hugo Blanco, que alcanzó la segunda votación más alta para la Asamblea Constituyente de 1978, después de Haya de la Torre; de partidos marxistas como el PCP, la UDP o el UNIR, que conformarían poco después Izquierda Unida y tenían fuerte influencia en organizaciones sociales como la CGTP, la CCP o el SUTEP, que vivían por entonces sus años de auge. Recuérdese que esos partidos seguían proclamando la legitimidad de la vía armada para la captura del poder.

³⁹ Recuérdese que el 22 y 23 de mayo de 1978 tuvo lugar otro paro nacional de grandes dimensiones, y que también en 1978 se produjo la más importante huelga del SUTEP, entre otros muchos paros y movilizaciones.

El PCP-SL había permanecido al margen o había tenido una presencia muy reducida en las masivas movilizaciones sociales de finales de la década de 1970⁴⁰. La vigilancia, y la represión, se centraban fundamentalmente en ese sector de la izquierda. Eso contribuye a explicar que Guzmán haya sido apresado y liberado poco antes del inicio de su «guerra popular» contra el Estado peruano. Su insignificancia en el escenario político y gremial jugó a favor de su aventura militar. Actuaron confundidos entre otros actores que, compartiendo un discurso violentista, estaban desarrollando otro tipo de acciones.

Además, aún cuando proclamaba una «guerra campesina» las acciones de SL no se iniciaron en alguna de las regiones donde la organización campesina estaba en auge: Cusco o Cajamarca, por ejemplo. Por el contrario, en dichos lugares tuvo serias dificultades para expandir su accionar. El conflicto se inició en Ayacucho, zona de escasa densidad de organizaciones y movilizaciones campesinas en los años previos a 1980, donde el Estado, cuya presencia era de por sí tremendamente tenue en las zonas rurales, tenía la guardia especialmente baja. De esta forma, los pequeños puestos policiales rurales en el norte de Ayacucho, absolutamente faltos de preparación, fueron rápidamente obligados a replegarse.

Ante el avance militar de este enemigo sorpresivo, Fernando Belaúnde se mostró reticente a convocar a las FF.AA. para el combate contrasubversivo. Se ha argumentado con razón que esta reticencia provino en parte de la amarga experiencia del golpe militar de 1968, que terminó con su primer gobierno. Habría que enfatizar, también, la vocación democrática del gobierno, la voluntad de marcar una diferencia con el docenio militar, recalcando el carácter civil del régimen.

Además de la sorpresa general, contribuyó a la supervivencia de SL su carácter radicalmente autárquico. En los primeros años el gobierno de entonces trató de encontrar vínculos entre la subversión y algún país del campo socialista. El propio SL se encargó de descartar rápidamente esa hipótesis con acciones violentas contra la nueva dirección del PC Chino⁴¹ y las embajadas de los países comunistas.

Todos los factores hasta ahora mencionados no hubieran sido suficientes, si SL no lograba captar la aceptación o la neutralidad de sectores sociales significativos, especialmente campesinos. ¿Cómo llegó a ellos y qué tipo de campesinos eran?

Durante la década de 1970, la mayoría de partidos que luego conformarían IU tendió a sacar de las universidades a una parte de los jóvenes que allí captaba, por lo general los más comprometidos, para enviarlos al campo e incorporarlos en distinto grado a un circuito de

⁴⁰ En realidad, salvo la huelga del SUTEP de 1978 y la de estudiantes secundarios en 1979, el PCP-SL se había opuesto a esas movilizaciones, incluyendo los paros nacionales de 1977 y 1978, pues consideraba que estaban dirigidos por el «revisionismo» del PCP-Unidad. Sobre los diferentes grupos de izquierda y sus orientaciones, véase el capítulo sobre Izquierdas.

⁴¹ Los famosos perros colgados de postes que aparecieron en algunas calles de Lima en 1980 con letreros que decían: «Deng Xiaoping hijo de perra».

reproducción partidaria cuyo eslabón central era la construcción de gremios campesinos⁴² y cuya eficacia se medía por la capacidad de control y movilización de esos gremios⁴³. Las movilizaciones gremiales y luego el éxito electoral de esa izquierda, reforzaron su visibilidad y favorecieron la subestimación del PCP-SL, que a su vez descalificaba a esos grupos, criticándolos por construir «partidos para los gremios y no para la guerra popular». SL estableció un circuito diferente. Como dijimos, captó cuadros en ciertas universidades, pero los mantuvo dentro del circuito educativo, enviando a muchos de ellos como maestros a colegios rurales. Estos, a su vez, captaban estudiantes secundarios⁴⁴ a través de los cuales SL estableció cabeceras de playas en muchas comunidades. En este caso, el epicentro de reproducción partidaria eran los denominados «organismos generados»⁴⁵, que lo alimentaban de cuadros a través de las «escuelas populares»; y el criterio de eficacia desde fines de la década de 1970 fue el grado de cohesión ideológica alcanzado por el partido que, como hemos visto, se confundía casi con la sujeción a Guzmán. Luego, a partir de 1980, lo fue el crecimiento del propio partido y sobre todo el del llamado Ejército Guerrillero Popular, pues todo estaba «al servicio de la guerra popular».

A partir de este eslabonamiento, SL logró tejer una red partidaria y de apoyo, inicialmente en las provincias del norte de Ayacucho. Esta es una zona paradigmática entre aquellas donde, aparte de la migración, el acceso a la educación constituía casi la única posibilidad de superar la extrema pobreza y vincularse con la sociedad nacional. Los maestros y los jóvenes que estudiaban secundaria en las capitales provinciales, gozaban con frecuencia de una alta legitimidad como personificación del «mito del progreso» encarnado en la escuela⁴⁶. Reiteramos que en Ayacucho, los principales movimientos de las décadas de 1960 y 70 estuvieron vinculados a reivindicaciones educativas.

⁴² Entre quienes concentraron su trabajo en el campo destacan las diferentes fracciones de VR, MIR, PCR, que asumieron por esos años en mayor o menor medida el maoísmo. El PCP-Unidad, por su parte, concentraba sus fuerzas en los sindicatos obreros y el PCP-Patria Roja entre el magisterio. Sin embargo, el criterio de eficacia era el mismo: el fortalecimiento y capacidad de control y movilización de los gremios. Ese fue el «capital social-político» que acumularon, especialmente durante la segunda mitad de la década de 1970. A partir de entonces, dicho capital se transformó en «capital político-electoral», con algunas variantes como el peso creciente de líderes individuales, reforzado por la introducción, precisamente a partir de las elecciones de 1978, del voto preferencial, que permite al elector singularizar al candidato que se presenta como parte de una lista partidaria.

⁴³ En la década de 1980, la medición de la eficacia se fue desplazando rápidamente del fortalecimiento y movilización de gremios al éxito electoral.

⁴⁴ Otra de las tareas de los maestros era servir de «huéspedes» para los cuadros que venían a activar en las «escuelas populares» y posteriormente a las fuerzas principales y locales del EGP senderista. Véase el capítulo sobre el PCP-SL y varias Historias representativas de la violencia en el tomo V.

⁴⁵ Sobre la definición de «organismos generados», véase el capítulo sobre el PCP-SL. A SL no le interesaba tanto el control y la movilización de gremios sino la construcción, muchas veces dentro de esos mismos gremios, de pequeños «movimientos propios como organizaciones generadas por el proletariado en los diferentes frentes de trabajo» (PCP-SL 1988. Bases de discusión. El pensamiento Gonzalo y los trabajadores). El «proletariado» son ellos, por cierto. Entre los organismos generados que se volvieron famosos en los años de conflicto, están el Movimiento Obrero de Trabajadores Clasistas (MOTC), el Movimiento Femenino Popular, entre otros.

⁴⁶ Tanto en las Audiencias Públicas, como en innumerables testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se constata la enorme importancia otorgada a la escolarización en las zonas rurales andinas. La asociación de la escuela con el acceso a la luz y a la visión y de la falta de escolarización con la noche y la ceguera ha sido referida por diferentes autores. Véanse libros y artículos sobre el tema de autores como Rodrigo Montoya, Juan Ansión, Carlos Iván Degregori.

De esta forma, el PCP-SL inicialmente logró «conquistar bases» en los márgenes, no sólo del Perú urbano sino del propio Perú rural organizado y dinámico, inscribiéndose en esa larga tradición en la cual el poder se negocia y conquista a través del uso de la violencia física. Su propuesta logró aceptación especialmente en comunidades con profundos conflictos internos, baja legitimidad de sus autoridades y envidia por el acceso diferenciado a recursos escasos, con una propuesta de fin de la marginación, igualamiento hacia abajo, destrucción de infraestructura productiva y repartos, especialmente de ganado. Así, el asesinato de algún hacendado supérstite o de comuneros «ricos», que con frecuencia ocupaban cargos de poder, y el reparto de sus bienes y ganados, contribuyeron a ganarle la adhesión campesina. Además, SL apareció muy temprano como propuesta de un «nuevo Estado», portador de orden y administrador de justicia vertical y draconiana, que ponía coto a conductas consideradas antisociales, abigeato y abusos.

La expansión de SL a otras zonas del país mostró que los «eslabones sensibles» de intelectuales y jóvenes educados no constituían sólo un fenómeno regional sino que se extendían por una cadena de ciudades, incluyendo Lima. Asimismo, que los rasgos de pobreza, escasa organización rural y ejercicio del poder asociado al uso de la violencia física, mencionados en el párrafo anterior, no eran exclusividad de Ayacucho. Mostró, además, que existían otras zonas rurales altamente conflictivas, como aquellas donde la Reforma Agraria había conformado SAIS; o como los valles cocaleros, donde poblaciones enteras habían sido empujadas a la ilegalidad y donde la policía y la justicia llegaron a identificarse más que en ningún otro lugar del país con el abuso y la corrupción.

Para explicar la duración y expansión del fenómeno subversivo es necesario tener en cuenta además, otros dos factores. Por un lado, el PCP-SL y en mucho menor medida el MRTA se convirtieron en magnetos que atrajeron a minorías descontentas desgajadas de los grupos de izquierda que a fines de los setentas habían dado un viraje, en muchos casos no del todo coherente, del discurso de la lucha armada a la participación electoral⁴⁷. Por otro lado, en ambos casos se llegaron a crear ciertas identificaciones regionales con los proyectos subversivos-el MRTA en San Martín, el PCP-SL en el norte de Ayacucho- que trascendían el campo e incluían franjas urbanas. El entierro de Edith Lagos en Ayacucho en 1982 es el ejemplo más notorio. En el caso del MRTA, esta identificación estaba en cierto grado mediada por los gremios sobre los cuales tenía influencia: la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA), o el Frente de Defensa de San Martín⁴⁸. En el caso del PCP-SL, la identificación no tenía otra instancia en la cual depositarse que no fuera el partido, y la violencia. Pero eso no fue obstáculo y posiblemente favoreció más bien la construcción de una identidad muy fuerte entre la periferia de SL, que alimentaba sus «organismos generados». Allí se configuraba una suerte de «nosotros» con fronteras muy rígidas y excluyentes, basado en una

⁴⁷ SL exigía la disolución del grupo y la incorporación individual de aquellos miembros que decidían absorber. En el otro extremo, el MRTA mismo fue producto de fusiones sucesivas de varios grupos de izquierda, que optaron por la violencia.

⁴⁸ En su incidencia pública a través de gremios, el MRTA mostraba, como en otros aspectos, semejanzas con los grupos que conformaban IU. Véase sobre estos temas los capítulos sobre IU y MRTA.

cercanía étnico-regional donde se entrelazaban el color de piel, la lengua, las costumbres, con una percepción de agravio provocada por la inequidad y la discriminación. SL llegó a proporcionar así una identidad, una «estructura de sentimientos», a estudiantes pobres dependientes de los servicios universitarios, discriminados y «ubicados entre dos mundos»; pero también en pequeños núcleos barriales de Lima y sectores campesinos hartos de la pobreza, el abuso y la exclusión.

Todos los factores hasta ahora mencionados, tampoco hubieran bastado para explicar la duración e intensidad de la subversión, si las elites políticas hubieran estado a la altura del desafío. SL se alimentó de los gravísimos errores cometidos por el Estado y los partidos políticos, más allá del justificable desconcierto inicial. Estos errores configuraron un proceso que hemos denominado «abdicación de la autoridad democrática». Este se inició con la rutinización de los estados de emergencia; los poderes excesivos otorgados a los comandos político-militares; la estrategia contraproducente de las FFAA a partir de 1983, inspirada en la doctrina de seguridad nacional, que postergó la ruptura entre el campesinado ayacuchano y SL; la incapacidad del poder judicial, que propició la impunidad; la ineficacia del Poder Legislativo para legislar eficazmente sobre terrorismo y para investigar las violaciones a los derechos humanos; la inexistencia de una política penitenciaria en relación a los subversivos presos, que llevó a que los penales fluctúen entre las fugas y las masacres; el recurso a grupos paramilitares y escuadrones de la muerte; hasta culminar en el golpe de Estado de abril de 1992.

Más allá de esta abdicación, que fue en todo caso un síntoma, Sendero Luminoso logró revelar «fallas geológicas» muy profundas sobre las cuales se había reconstruido el régimen democrático a partir de 1980. Si algo le resultaba indispensable al PCP-SL para que su proyecto sobreviviera y avanzara, era construir un enemigo a su imagen y semejanza. Primero, en la mente de sus propios militantes; luego, en el país.⁴⁹

Por eso, a contracorriente de un sentido común que considera la «mano dura» (léase autoritarismo y respuesta violenta) como indispensable para acabar con el terrorismo, las investigaciones de la CVR demuestran que cada vez que el Estado se acercó al Leviatán que Guzmán describía en sus pesadillas, le regaló un triunfo a la subversión. Así, «la cuota» fue respondida con las masacres de 1983-84, por las que para muchos ayacuchanos las FF.AA. aparecieron como externas., ajenas a la región. La estrategia provocadora de «inducir genocidio» fue respondida con la masacre de los penales; y el traslado de la violencia terrorista a las ciudades, con el surgimiento de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte. Estos fueron todos triunfos para Abimael Guzmán, pues le permitían validar sus tesis ante sus militantes e incluso aparecer como el «mal menor» para ciertos sectores sociales afectados por la respuesta estatal. SL podía seguir floreciendo en el único terreno en el cual podía hacerlo, el de la violencia, regado con sangre

⁴⁹ «Sueños de sangre de hiena tiene la reacción; agitados sueños estremecen sus noches sombrías; su corazón maquina siniestras hecatombes; se artillan hasta los dientes pero no podrán prevalecer...», clamaba Guzmán ante sus huestes en la denominada 1ª. Escuela Militar del Partido un par de meses antes del inicio de sus acciones.

como gustaba afirmar. Al Estado le fue muy difícil encontrar un camino entre la ineficacia, por un lado, y la contraproducente «mano dura» autoritaria, por otro. Las consecuencias en la vida política del país, las sentimos hasta hoy.

No se trata entonces sólo de errores, excesos o limitaciones de los diferentes actores directos o indirectos del conflicto. El país, sus instituciones y su régimen político exhibieron en esos años nuestros lados más oscuros, que no habían logrado ser incorporados a la dinámica de la representación política. SL surgió y logró presencia en los límites no representados de nuestra sociedad. Desde esos espacios -donde incluso los partidos de izquierda activos en la década de 1970 no llegaron o tuvieron escasa presencia, o terminaron yéndose- SL avanzó hacia otros ámbitos aprovechando los errores del Estado, la crisis económica y luego la descomposición reinante al final de la década de 1980.

La mera existencia de espacios que no alcanzaban a ser representados políticamente nos habla de fallas profundas de nuestra configuración como nación, que incluyen pero trascienden la responsabilidad de gobiernos, partidos políticos y FF.AA. En otras palabras, la duración relativamente larga del conflicto armado interno, tuvo que ver también con la fragilidad de nuestro sentido de comunidad nacional, que debía estar sustentado sobre la base de tener y ejercer derechos ciudadanos. La fragilidad de ese sentido nacional y ciudadano se sintió más allá de las zonas rurales periféricas y abarcó en mayor o menor medida al conjunto del país.

Así, vistos desde el centro del poder político, económico y simbólico, los sectores que llamamos «irrepresentados» resultan in-significantes: aportan poco al PBI; si son rurales, por su escaso peso demográfico no deciden elecciones; si son urbanos, por su extrema pobreza son fáciles de clientelizar. La opinión pública pudo fluctuar entonces entre la indiferencia y la exigencia de una solución rápida al conflicto, sin importar mucho el costo social. Después de todo, las víctimas eran principalmente «otros»: pobres, rurales, indios. Lejanos no sólo geográfica sino sobre todo emocionalmente. Por ello la lejanía incluyó los conos de Lima, donde el conflicto llegó con su secuela de rastrillajes y estigmatización de los diferentes, en este caso los migrantes⁵⁰. El centralismo y el racismo jugaron así su papel en la prolongación del conflicto y revelaron las miserias de nuestra democracia realmente existente.

Los resultados electorales de 1985 en el distrito de Chungui, provincia de La Mar, Ayacucho, son un ejemplo extremo de esta situación. Dicho distrito fue uno de los tres donde la Comisión de la Verdad y Reconciliación constató la mayor cantidad de muertos y desaparecidos. En medio de una verdadera hecatombe que se producía allí en esos años por el enfrentamiento entre senderistas, militares y ronderos, los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones nos dicen que de los 1473 electores hábiles del distrito, votaron 1466⁵¹, todos lo hicieron por un solo

⁵⁰ Véase los casos de Raucana y Huaycán.

⁵¹ Sólo seis no habrían acudido a votar.

partido para presidente, senadores y diputados, sin un solo voto nulo o en blanco (véase el cuadro a continuación).

DISTRITO DE CHUNGUI
(Creado en la Época de la Independencia)

RESULTADOS ELECTORALES: 1985

8 Mesas de Sufragio

Partidos Políticos, Alianzas Electorales y Listas Independientes	Fórmula Presidencial	Senadores	Diputados
Izquierda Nacionalista	0	0	0
Mariateguista para la Liberación Nacional	----	0	----
Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio	0	0	0
Partido Avanzada Nacional	0	0	----
Izquierda Unida	0	0	0
Partido Socialista del Perú	----	0	----
Convergencia Democrática	0	0	0
El Frente	0	0	0
Acción Popular	0	0	0
Partido Aprista Peruano	1,466	1,466	1,466
Partido Socialista de los Trabajadores	0	0	----
L.I. Frente Agrícola Humanista Femenino	----	0	-----
Votos nulos	0	0	0
Votos en blanco	0	0	0
Totales	1,466	1,466	1,466

Distrito de Chungui. Capital: Chungui. Categoría: Pueblo
Población Electoral 1,473. Habitantes: 8,257.
Hombres: 4,133. Mujeres: 1,124.

Of. Distrital del Registro Electoral de la Municipalidad

Por último, el contexto de crisis económica favoreció también el avance de los grupos subversivos. La crisis económica que arrastramos la mayor parte de la década y que llegó a extremos inéditos en los años finales del gobierno de Alan García, fue parte de la crisis final, en toda América Latina, del modelo de crecimiento por sustitución de importaciones y protección del mercado interno, denominado ahora «modelo populista». Si a ello sumamos la relativa tolerancia de la comunidad internacional hacia las violaciones a los DD.HH. por parte del Estado, tenemos un

cuadro en el cual, hacia 1990, todos los (f)actores parecían jugar a favor de los grupos subversivos, especialmente SL.

1.7. POR QUÉ EL CONFLICTO FUE TAN CRUEL

Para responder esta pregunta regresemos a la escena primera de este capítulo, a las movilizaciones campesinas de las décadas de 1960 y 70. Durante las ocupaciones de tierras, *policías e 'invasores' ocupaban sus lugares, pero no ocurría nada más, para desesperación de los propietarios. ¿Qué es lo que ha cambiado?*⁵² El historiador Flores Galindo responde describiendo las transformaciones económicas y políticas que habían tenido lugar en el país: el papel secundario que pasó a ocupar la agricultura en la formación del PBI; el consecuente debilitamiento de los terratenientes serranos, convertidos en socios más bien incómodos dentro de la estructura de poder⁵³. Pero las movilizaciones son bastante incruentas porque también los campesinos habían cambiado profundamente. Las largas columnas que invaden las haciendas no llevan armas, no buscan enfrentarse con *los mistis. Las casas haciendas son respetadas...*⁵⁴. Ya no se trataba de asonadas, «estallidos breves y sin norte» como los que jalonaron la historia rural andina. El movimiento era esta vez más organizado, planificado y político, y se vio coronado por el éxito.

Lo que está ausente entonces, en las décadas previas al estallido de la violencia en 1980, es la voluntad de matar. Menos aún de matar masiva y/o sistemáticamente. Ni de parte del Estado, ni de parte de los campesinos ni de los principales partidos políticos. La dirección de Sendero Luminoso tuvo que concentrar sus energías en inocular esa voluntad, en primer lugar en sus militantes, y luego en provocar al Estado y a la sociedad en su conjunto para que la muerte se vuelva, por así decirlo, un modo de vida.

En las bases filosóficas, políticas e incluso psicológicas de la acción subversiva, especialmente del PCP-SL, se constata un decisivo punto ciego: SL «ve clases, no individuos». De allí se deduce la falta grosera de respeto por la persona y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes pues para mantener la cohesión del partido la dirección exacerbó en ellos una vena tanática -«llevar la vida en la punta de los dedos», «cruzar el río de sangre»- que se convirtió en un sello de identidad, un desafío **a todo** el orden existente y tiñó el proyecto senderista de potencialidades terroristas y genocidas. El potencial terrorista se desplegó desde los «ajusticiamientos» con sevicia y prohibición de entierro, hasta los coches-bombas en las ciudades. El potencial genocida se encuentra desde el discurso de Guzmán cuando anuncia que «el triunfo de la revolución costará un millón de muertos», y podemos imaginar qué hubiera pasado en el país si su proyecto seguía avanzando. No es casualidad que ese potencial genocida se haya desplegado

⁵² Alberto Flores Galindo. *Buscando un Inca*, p. 314.

⁵³ Op.cit., p. 314.

⁵⁴ Ibid.:309.

especialmente en zonas indígenas, pues SL reprodujo antiguas concepciones racistas y de superioridad sobre los pueblos indígenas en sus propios términos. Allí las «masas» eran todavía más «fungibles». De los estudios realizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las acciones de SL en territorio asháninka y en la zona denominada Oreja de Perro son aquellas donde se constata de manera más descarnada esa potencialidad⁵⁵.

Por otro lado, «batir el campo» y construir el «nuevo poder» exigían un alto costo en vidas humanas pues a pesar de todas las brechas sobre las cuales estaba construido el Estado, el contexto peruano era desfavorable para una «guerra popular del campo a la ciudad». A pesar de los vacíos de poder, el campo estaba mucho más poblado de actores, instituciones, organizaciones; y más interconectado que la China de los años 30, que servía de inspiración a SL. Por eso, luego de una primera etapa de aceptación, tuvieron que recurrir crecientemente a la imposición por el terror: primero a través de los asesinatos («ajusticiamientos»), en especial de autoridades locales. Tanto o más que la muerte, choca la forma en que los senderistas matan.

El PCP-SL trataba de convertir esos asesinatos en «castigos ejemplificadores», para imponer su voluntad sobre la población. Por eso, en muchos testimonios ofrecidos a la CVR, se expresa esta mezcla de dolor e indignación que produce ver morir a familiares «como animales». A eso se suma, en muchos casos, la prohibición de enterrarlos. Luego, con la entrada de las FF.AA. a combatir la subversión a partir de 1983, la táctica senderista de los «contrarrestablecimientos» incrementó aún más el número de víctimas civiles. Desde Lima, Guzmán propuso construir «comités populares paralelos» precisamente cerca de donde se instalaban bases militares⁵⁶ para provocar la reacción del Estado: esto contribuyó a la masividad de las víctimas.

Pero el otro factor para explicar la crueldad del conflicto armado interno es la respuesta del Estado. Que la provocación mortífera de SL haya encontrado eco, muestra que en las décadas previas de «baja intensidad» de muertes por conflictos sociales y enfrentamientos políticos, el país había transitado en realidad por un largo y difícil desfiladero, que SL logró bloquear, al menos temporalmente. En las décadas de 1980 y 90 se revelaron todos los abismos ya anotados: no sólo la falta de comunidad nacional ciudadana sino el desprecio teñido de racismo por los campesinos, que permeaba las instituciones del Estado, incluyendo a las FF.AA. En los primeros años de su intervención, ellas se comportaron con frecuencia como un agente externo a la región⁵⁷. Las torturas y asesinatos, las masacres y las desapariciones, son actos de crueldad que han sido reportados masivamente a la Comisión de la Verdad.

Este desprecio por la vida de campesinos, mayoritariamente quechua hablantes, se revela por contraste en toda su crudeza cuando los grupos subversivos, tanto SL como el MRTA, llevan el

⁵⁵ Véase los apartados sobre asháninkas y Oreja de Perro.

⁵⁶ Esta táctica es discutida posteriormente en la III Sesión del I Congreso del PCP-SL.

⁵⁷ Son más bien los campesinos los que parecen tener de cierta manera una mayor conciencia de comunidad nacional, pues cuando relatan sus historias creen que quienes los están matando son «extranjeros», «gringos», pishtacos. No conciben que sean sus connacionales los que los maten «como animales».

conflicto a las ciudades. De acuerdo a los testimonios recogidos por la CVR, el tamaño promedio del grupo en el que murieron quienes fueron ejecutados por agentes del Estado⁵⁸ es 5.7 veces mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas (21.2 vs. 3.7). En estas últimas, la estrategia fue más selectiva. Por eso masacres como la Cantuta o Barrios Altos, a pesar de ser pocas se convierten en emblemáticas. En el campo, como indican las cifras, la represión fue más indiscriminada⁵⁹.

Pero la violencia desatada por SL, confundido entre la población, obligando a los campesinos a actuar como «masa» en los enfrentamientos, también hizo aflorar el miedo. Esos «otros» despreciados, muchas veces incomprensibles, comenzaron a ser vistos como peligrosos, sin distinguir si eran o no senderistas. A su alrededor comenzó a (re)tejerse toda una mitología que los convertía en seres resistentes a las torturas e imperturbables ante la muerte. Los viejos imaginarios racistas sobre el «indio» terco, cruel, traicionero, reaparecieron con fuerza. El miedo azuzó la crueldad de las fuerzas contrasubversivas.

A esto se añade, por un lado, la influencia de la doctrina de seguridad nacional, que enmarcó las represiones a los grupos subversivos en el Cono Sur y América Central e implicaba un alto costo en vidas humanas. Por otro, el poco enraizamiento de las doctrinas de DD.HH., que recién comenzaban a transformarse en instrumentos legales y a ser sancionadas en tratados internacionales incorporados en la legislación nacional y posteriormente también en la formación de las FF.AA.

Si la etapa anterior fue de moderación por parte de todos los actores, la irrupción de SL abrió una Caja de Pandora que los trastocó a todos. Así, en las zonas rurales más pobres SL se involucró y en muchos casos acabó potenciando y militarizando viejos conflictos sociales intra e intercomunales. En zonas donde la Reforma Agraria había creado grandes propiedades semiestatales como las SAIS, en un contexto de debilitamiento de las organizaciones campesinas SL impulsó la destrucción de infraestructura productiva y los repartos o matanzas de ganado, un retroceso significativo con respecto a las décadas anteriores. La única excepción significativa fue Puno, donde las organizaciones campesinas desarrollaron sus antiguas estrategias para luchar contra las SAIS, y donde un tejido social y político más denso, así como la propia acción del gobierno nacional primero y del regional después, impidieron el despliegue de SL⁶⁰. En zonas afectadas por el narcotráfico, SL terminó agudizando la dinámica de por sí violenta de una sociedad de frontera, dinámica en la que se involucraron también y con crueldad las fuerzas del orden. Por otro lado, SL exacerbó el castigo físico, que era desde antes parte del repertorio de justicia, no sólo «indígena». SL llevó a extremos demenciales una tradición en la que caben desde los maltratos policiales y patronales, hasta el castigo físico en las comunidades campesinas.

⁵⁸ Esta definición se limita a aquellas víctimas cuyo cadáver ha sido ubicado.

⁵⁹ Véase capítulo: Ejecuciones extrajudiciales.

⁶⁰ Véase: Historia Regional Surandina. Estudio en Profundidad: La batalla por Puno.

Las rebeliones contra SL fueron también brutales. La violencia latente en cualquier comunidad, especialmente pobre y en buena parte preciadana, se entremezcló con conflictos familiares, generacionales, de linderos, y se desbordó. Los comités de autodefensa, en muchos casos, fueron más allá de su función de autodefensa y se convirtieron también en pequeños ejércitos agresivos que «barrían» con gran violencia territorios que consideraban enemigos o prosenderistas.

La violencia abrió una caja de Pandora no sólo en las áreas rurales sino en la sociedad nacional en su conjunto. SL «atizó» y allí se reavivaron –en la respuesta del Estado y en la indiferencia de sectores importantes de la ciudadanía- todas las discriminaciones.

1.8. POR QUE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS FUERON DERROTADOS

Cuando un grupo violentista altamente motivado se levanta en armas pero no existen condiciones para su triunfo, una de las posibilidades es que se convierta en una «insurgencia crónica». Podría ser el caso, por ejemplo, de Colombia⁶¹. Felizmente para el país, a pesar de la subsistencia de núcleos armados en algunas zonas de la amazonía⁶², esto no ha sucedido en el Perú. ¿Por qué?

En primer lugar, la subversión se inició en un contexto democrático que, al margen de cualquier limitación, redujo espacios para propuestas violentistas. El funcionamiento del sistema de partidos y la realización de elecciones aún en los peores momentos de la violencia, funcionaron como parachoque y canal alternativo para procesar reclamos, conflictos y construir representaciones para la mayor parte de peruanos y peruanas. Durante el gobierno aprista (1989) se inició incluso un proceso de regionalización y, además de las elecciones municipales, se llevaron a cabo elecciones regionales en todo el país. La existencia de una izquierda legal que se constituyó en la segunda fuerza electoral durante casi toda la década, redujo todavía más los espacios de reclutamiento para los grupos subversivos. Esto lo padeció especialmente el MRTA, que terminó derrotado por sus propias contradicciones internas.

Si bien en un porcentaje minoritario pero significativos de provincias no hubo elecciones en 1989 y 1990, más importante y conmovedor aún es destacar la persistencia de autoridades electas en los distritos y provincias amenazados por la subversión, que dieron la cara a pesar de que sobre ellas pendía la amenaza terrorista y en algunos casos todavía también la del Estado⁶³. En muchos casos estas autoridades lo pagaron con su vida. Con frecuencia, cuando las amenazas terroristas de SL impedían las elecciones, asambleas públicas decidían elegir un representante que ocupara la alcaldía. En varios casos, las personas así elegidas fueron mujeres. Si bien el avance de los grupos subversivos y el recurso creciente al terrorismo fue una de las causas del quiebre de la

⁶¹ Véase libro de Eduardo Pizarro.

⁶² Nos referimos a los llamados «remanentes» de SL en los valles del Ene y Apurímac.

⁶³ Véase el tomo VII, los casos 46 y 47.

institucionalidad democrática, como hemos visto en el capítulo sobre las FF.AA. el golpe de Estado de abril de 1992 se dio cuando ya SL se encontraba estratégicamente derrotado.

La existencia de prensa independiente, que documentaba horrores, incluso en las zonas directamente afectadas por la violencia, fue también un factor que contribuyó a frenar la brutalidad de las acciones contrasubversivas y a crear un clima contrario a los grupos subversivos, especialmente su recurso a los secuestros y al terror. De esta forma, si bien hemos mencionado la fluctuación de la opinión pública entre la indiferencia y el reclamo de soluciones expeditivas autoritarias, también es cierto que los grupos subversivos nunca llegaron a tener aceptación entre sectores importantes de la población.

Existieron, además, organismos fiscalizadores desde la sociedad civil, que cuestionaron los crímenes y violaciones a los DDHH, tanto del Estado como de los grupos subversivos: organismos de DD.HH., sectores importantes de la iglesia católica y de iglesias evangélicas. Aún cuando en buena parte del período de la violencia fueron una minoría, le restaron sin embargo legitimidad nacional e internacional tanto a la subversión, que trataba de presentarse en el extranjero como una guerrilla romántica y popular, como también a las estrategias contrasubversivas de «guerra sucia».

Tampoco las organizaciones sociales populares, obreras, campesinas, magisteriales, sindicales en general, fueron ganadas por los proyectos subversivos⁶⁴. El PCP-SL se convirtió más bien en un «antimovimiento social»⁶⁵, que desmovilizaba, destruía y/o fagocitaba a las organizaciones que caían cerca de su esfera de influencia⁶⁶.

De todos los rechazos, el que más contribuyó a la derrota de los grupos subversivos, fue el rechazo del campesinado, especialmente del campesinado pobre. Ellos tenían que haber sido la «fuerza principal» de la revolución, estaban destinados a ser los aliados fieles, la segunda voz, el coro que acompañaría al partido y a su jefatura concentrada en alcanzar «el do de pecho» que transformaría el mundo⁶⁷. Pero salvo excepciones, SL no logró un asentamiento sólido entre el campesinado y terminó provocando «la rebelión del coro».

Es que luego de la destrucción del «viejo orden» -eliminación de autoridades, destrucción de infraestructura productiva, ataques a proyectos de desarrollo incluyendo proyectos comunales SL sólo pudo ofrecerles:

a) una propuesta económica de autosubsistencia, arcaica en el mediano plazo incluso para los campesinos más pobres,

⁶⁴ En cierta medida, los movimientos del departamento de San Martín pueden ser una excepción, por la influencia que tuvieron en ellos organismos cercanos al MRTA, pero éste desperdició esa oportunidad para plantear a partir de ella alguna forma de integración al sistema político. (véase el capítulo sobre el MRTA).

⁶⁵ El concepto es de Wieviorka: *Terrorisme*, Fayard 1991.

⁶⁶ Ello a partir de su propuesta totalmente sectaria de construir dentro de esos gremios «organismos generados por el partido» y ponerlos «al servicio de la guerra popular», sin tener en cuenta los intereses concretos de los trabajadores. Véase capítulos sobre SL.

⁶⁷ Véase cita en el capítulo sobre SL.

b) la instauración efímera de una utopía igualitarista, que pronto mostró sus límites autoritarios, especialmente en: i) la aplicación de una justicia mortífera, que recurría a la «pena de muerte» con gran facilidad; ii) una propuesta política totalitaria, que regulaba la vida cotidiana hasta sus detalles más mínimos, pasando así de la necesidad de orden al exceso de orden vertical, que llegaba a extremos grotescos como cuando el partido prohibía estar triste.

Los asesinatos de SL y la forma en que se producían no sólo chocaban contra el apego a la vida de cualquier comunidad humana, sino que resultaban contraproducentes en una economía sumamente pobre, que no podía darse el lujo de disponer de la vida de personas, en su mayoría hombres jóvenes con familias e hijos menores de edad. Por eso en muchos testimonios recogidos por la CVR en diferentes partes del país, los afectados pedían al partido: «castiga, pero no mates». En otros, las mujeres piden que si van a matar a alguno de los padres, maten mejor a toda la familia, pues: «quién se va a hacer cargo de los hijos». Concentrado en la construcción de un orden radicalmente «nuevo», que exigía «extirpar de raíz la mala hierba», SL era ciego ante estos reclamos.

La propuesta política totalitaria implicaba una actitud intolerante hacia las manifestaciones culturales locales, no sólo la celebración de fiestas o la elección de autoridades tradicionales, sino elementos tan básicos como el enterrar a los muertos, o el uso de los términos de parentesco que desde el principio de los tiempos regulan las identidades y las relaciones sociales, para reemplazarlos por el término «compañero».

Pero sobre todo, con el campesinado involucrado crecientemente en una economía mercantil y un proceso de individuación, las propuestas de SL chocaron contra la dinámica de las sociedades rurales. Sorprendentemente para SL, el concepto de guerra **prolongada**, chocó contra la lógica de reproducción campesina, que se ordena alrededor del ciclo de vida familiar y planifica en función del crecimiento y **educación** de los hijos. En ese contexto, cuando SL apuró el paso para lograr el «equilibrio estratégico», lo que hizo fue romper el precario balance que todavía mantenía en muchas zonas rurales. Para lograr el equilibrio estratégico SL requería un mayor apoyo campesino: mayores víveres para el partido, más reclutas entre los jóvenes. Esto incrementó el malestar campesino que, al empalmar con un cambio en la estrategia de las FF.AA., produjo la masificación de los comités de autodefensa (CADs), que propinaron a SL su primera derrota estratégica, en el ámbito en el cual menos la esperaban.

Asimismo, la creación de un «nuevo Estado» senderista mostró toda su precariedad y chocó cada vez más amplia y frontalmente con un campesinado que, incluso en las zonas más alejadas, se sentía parte del Estado o necesitaba de éste. En innumerables testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se recogen las quejas por acciones como incendios de municipios y las dificultades que la destrucción de los registros públicos implicaba para el campesinado. Asimismo, en un país donde en muchos casos se produce una suerte de construcción

del Estado por demanda (por ejemplo, cuando los campesinos piden escuelas, centros de salud, distritalización), conforme se prolonga el conflicto, la estrategia senderista revela lo irreal de su «nuevo Estado» y su errónea evaluación, no sólo de las autoridades estatales sino de los licenciados de las FF.AA. Para SL, los licenciados eran «externos» a las comunidades, parte de un «viejo Estado» ajeno al campesinado. Para éstos, por el contrario, desde mucho tiempo antes, las autoridades comunales, jueces de paz, alcaldes y también licenciados, fueron vistos más bien en muchos casos como un vínculo necesario con el Estado realmente existente, al margen de cualquier deficiencia de éste.

A partir de sus propias experiencias en los primeros años de la guerra y a partir de las peculiaridades históricas de las FF.AA, éstas aprenden y calibran mejor al enemigo. Ya desde los primeros años, hubo oficiales que comprendieron la situación y buscaron ganarse la confianza de la población. Muchos de ellos son recordados positivamente por su sobrenombre, algunos convertidos en personajes casi míticos. Ellos son precursores de ese cambio de estrategia que, como ya se ha mencionado, otorga más peso al trabajo de inteligencia, vuelve la represión más selectiva, busca ganar a la población rural y hacer alianza con los ronderos o presionar al campesinado para que se organice en CADs allí donde encuentra resistencia. En zonas de narcotráfico, hacia fines de la década de 1980 privilegia la alianza con los campesinos. En muchas áreas rurales, es la Fuerza Armada la que termina moviéndose «como pez en el agua».

Posteriormente, a fines de la década de 1990, las FF.AA. realizan un balance crítico de su actuación y señalan: «el respeto de los Derechos Humanos es un objetivo político de la lucha contra la subversión y no un marco limitativo de las operaciones militares, en tal sentido, es necesario que todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional entiendan la importancia de este concepto y lo apliquen»⁶⁸.

La ausencia de grandes propietarios rurales contribuyó, además, a que no se formaran grupos paramilitares como los que existieron en Guatemala, El Salvador o los que existen en Colombia. Las zonas de narcotráfico resultan en cierta medida una excepción.

También el contexto internacional se fue volviendo cada vez más adverso para los grupos subversivos, que actuaban a contracorriente de un cambio de época. El fin de la guerra fría y el derrumbe del campo socialista afectó directamente al MRTA, especialmente porque favoreció el desarrollo de negociaciones y acuerdos de paz en varios países de América Latina, incorporando a la vida política a movimientos guerrilleros que eran inspiración y a veces lugar de entrenamiento del MRTA.

En lo que se refiere al PCP-SL, la acentuación del viraje en la China post Mao convirtió a los seguidores de la denominada Gran Revolución Cultural Proletaria en una excentricidad. El PCP-SL se vinculó a un llamado Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), que agrupa

⁶⁸ Ministerio de Defensa Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estrategia Integral para la Contrsubversión, Lima – Perú, Enero del 2000, pp. 78.

a docena y media de grupúsculos sin incidencia en sus respectivos países, salvo el Partido Comunista de Nepal. En los organismos defensores de DD.HH. y de solidaridad con los países del Tercer Mundo, SL resultó cada vez más aislado y repudiado. Hacia fines de la década de 1980, sus «embajadores del terror» difícilmente encontraban ante quien presentar sus credenciales. Si bien en su accionar militar el PCP-SL fue siempre radicalmente autárquico, este aislamiento no dejó de ser importante para un partido que se consideraba «faro de la revolución mundial».

Si queremos singularizar un factor que sea el más importante para explicar la derrota del PCP-SL, este es su incapacidad de aprender. Totalmente ensimismado en la construcción y fortalecimiento del partido y el denominado «ejército guerrillero popular», SL terminó construyéndose un exoesqueleto muy poderoso para evitar las tendencias centrífugas y mantener cohesionado su pequeño organismo, pero que al mismo tiempo lo blindó contra la realidad. De esta forma, mientras el Estado a través de sus gobiernos y de las FF.AA. aprendían y rectificaban los aspectos más indiscriminados y contraproducentes de su estrategia, en diferentes partes del país y en diferentes momentos a lo largo de la década de 1980 se constataba la repetición del ciclo: conquistar bases / restablecimiento / contrarrestablecimiento / repudio de la población. La diferencia entre unas FF.AA. que aprenden y un PCP-SL que repite sus errores se advierte en los gráficos 3, 4 y 5, que muestran cómo la cantidad de víctimas en general, y en especial las rurales y quechua hablantes provocadas por los agentes del Estado bajan notoriamente, mientras SL continúa e incluso incrementa su agresión contra aquellos en cuyo nombre supuestamente actuaba. A la luz de estos datos, la decisión de Abimael Guzmán de «alcanzar el equilibrio estratégico» revela de manera descarnada su calidad de «huida hacia delante». En términos prácticos, ella significó: a) un desborde del terror en las ciudades, a través de los paros armados y los coches-bombas; b) la masacre de poblaciones rurales, especialmente los asháninkas y, c) la sobreexposición del aparato senderista y la caída de su dirección nacional en 1992.

La CVR quiere destacar, finalmente, otro factor más allá del rechazo de la opinión pública a los grupos subversivos: la terca voluntad de persistir de los peruanos y peruanas en general, especialmente de aquellos que vivieron y sobrevivieron en las zonas más golpeadas por la violencia, donde continuaron existiendo mayoritariamente autoridades locales, escuelas, iglesias, trabajadores y vida cotidiana en general. A esa voluntad de despertar cada mañana, respirar hondo y continuar la vida en medio del terror, nuestro homenaje.